

Usos y apropiaciones del discurso eco-modernizador en la definición de las agendas de investigación de la Estación experimental de Quimilí-INTA durante el periodo 2011-2022

Uses and appropriations of the eco-modernizing discourse in the configuration of the research agendas of the Quimilí-INTA Experimental Station during the period 2011-2022

Pablo Alberto Concha Merlo

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social (UNSE-CONICET), Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
 pabloconcha85@gmail.com

Recepción: 01 octubre 2024
 Aprobación: 15 febrero 2025
 Publicación: 01 marzo 2025

Resumen: La EEA Quimilí es una de las tres unidades experimentales del Centro Regional Tucumán-Santiago del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fue creada en 2011 y su área de influencia es la región este de la provincia de Santiago del Estero, una zona caracterizada por la expansión sistemática de la frontera agropecuaria. Desde su creación hasta el año 2022, la institución estuvo atravesada por múltiples usos y apropiaciones del discurso eco modernizador, que fungió como un lineamiento institucional significativo. De manera general, Hajer caracterizó como modernización ecológica una trama simbólica cuyos significantes giran en torno al eslogan de desarrollo sustentable. Dicho autor, entiende por modernización ecológica un discurso de desarrollo que apela a un sistema de valores, categorías de pensamiento y retóricas, que se han instituido a escala global, adquiriendo poder de legitimación significativo en la elaboración políticas públicas orientadas a responder a la crisis ambiental. Por múltiples razones descriptas en el texto, la modernización ecológica responde al proceso de emergencia e imposición de un guion verde de baja intensidad crítica en ámbito de las políticas públicas a escala global. Ahora bien, en el texto argumentamos que, en el contexto de la creación y la consolidación de la EEA Quimilí, este discurso de desarrollo fue apropiado activamente por diferentes actores para legitimar agendas de investigación que problematizan y excluyen selectivamente determinados objetos de investigación, en función de intereses, proyectos y contextos específicos.

Palabras clave: Modernización ecológica, INTA, Desarrollo sustentable, Agendas de investigación.

Abstract: The EEA Quimilí is one of the three experimental units of the Tucumán-Santiago Regional Center of the National Institute of Agricultural Technology (CRTS-INTA). It was created in 2011 and its area of influence is the eastern region of the province of Santiago del Estero, an area

characterized by the systematic expansion of the agricultural frontier. From its creation until 2022, the institution was crossed by multiple uses and appropriations of the eco-modernizing discourse, which served as a nodal institutional guideline. In general terms, Hajer characterized as ecological modernization a symbolic plot whose signifiers revolved around the slogan of sustainable development. He understands ecological modernization as a development discourse that appeals to a system of values, categories of thought and rhetoric, which have been instituted on a global scale, acquiring significant legitimizing power in the elaboration of public policies aimed at responding to the environmental crisis. For multiple reasons described in the text, ecological modernization responds to the process of emergence and imposition of a green script of low critical intensity in the field of public policies on a global scale. In this paper, we argue that, in the context of the creation and consolidation of the EEA Quimilí, this development discourse was actively appropriated by different actors to legitimize research agendas that selectively problematize and exclude certain objects, according to specific interests, projects and contexts.

Keywords: Ecological Modernization, INTA, Sustainable Development, Research Agenda.

1. Introducción

La EEA Quimilí cuenta con un área de influencia de 7.895.600 hectáreas (...) Las actividades abarcan las áreas de manejo sustentable de ecosistemas (...) Prioriza el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la competitividad de los sistemas agropecuarios, en un marco de sustentabilidad ambiental, económica y social.¹

Actualmente, la EEA Quimilí es una de las tres unidades experimentales del Centro Regional Tucumán-Santiago del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (CRTS-INTA)², junto con la EEA Famaillá (Tucumán) y la EEA Santiago del Estero. Fue creada formalmente por resolución del Consejo Nacional del INTA en el 2011; año a partir del cual comenzó el proceso de organización institucional, con la apertura de licitaciones para la construcción de instalaciones en el campo experimental y la incorporación de técnicos investigadores, becarios y extensionistas.

Se encuentra localizada a las afueras de la ciudad de Quimilí, la cabecera del Departamento Mariano Moreno, a 200 km de Santiago capital. El área de influencia de la EEA abarca casi 8.000.000 hectáreas, ubicadas en su totalidad al este de la provincia de Santiago del Estero. En lo que respecta a la cobertura territorial, la EEA centraliza las tareas de las seis Agencias de Extensión Rural (AERs) de Quimilí (Depto. Moreno), Añatuya (Depto. Taboada), Sachayoj (Depto. Alberdi), Monte Quemado (Depto. Copo), Bandera (Depto. Belgrano) y Malbrán (Depto. Aguirre), orientadas al desarrollo rural de grandes, medianos y pequeños productores. Cabe destacar, que, la provincia de Santiago del Estero se encuentra emplazada en la región del Gran Chaco Americano, una de las regiones más desmontadas en los últimos treinta años, producto de la expansión de la frontera agropecuaria. Siendo, además, el este de la provincia, una zona atravesada por importantes conflictos territoriales entre empresas y la población rural local.

Aunque la EEA Quimilí fue creada en 2011, cinco de las seis AERs se encontraban previamente en el territorio y dependían de la EEA Santiago del Estero. No obstante, la creación de la nueva dependencia del CRTS-INTA, no sólo permitió centralizar y coordinar desde Quimilí el trabajo de las diferentes AERs y sus lógicas de trabajo en extensión, sino que implicó la posibilidad de producir investigación situada y experimentalmente adaptada a la región. Ahora bien, las agendas de investigación (Gargano, 2011) desplegadas por la institución, estuvieron orientadas por ciertos tópicos discursivos vinculados a concepciones/discursos de desarrollo, que fueron instituidos (Bourdieu, 2007) en las actas fundacionales de la EEA y operaron activamente como “compromisos” –según las palabras de los actores— en las definiciones cotidianas de las prácticas a lo largo de su historia reciente.

Conforme a lo anterior, la página oficial del INTA, tal y como se observa en el epígrafe, describía el perfil de la EEA Quimilí haciendo especial hincapié en la producción y el desarrollo de conocimientos y tecnologías que hicieran competitivos y *sustentables* los diversos y heterogéneos sistemas agropecuarios de la región. Siguiendo esta carta de presentación institucional, nos enfocamos en tomar las referencias a lo sustentable/sostenible como un discurso social específico, con un rol significativo como horizonte de sentido en el proceso de planeamiento y concreción institucional de la EEA Quimilí, entre 2011 y 2021.

De manera general, Hajer (2002) caracterizó como modernización ecológica una trama discursiva cuyos significantes giraban en torno al eslogan de desarrollo sustentable o sostenible. Dicho autor, entiende por modernización ecológica una visión de desarrollo que apela a un sistema de valores, categorías de pensamiento y retóricas, que se han instituido a escala global, adquiriendo poder de legitimación significativo en la elaboración políticas públicas orientadas a responder a la “crisis ambiental” (Leff, 2013; Toledo López, 2020).

La modernización ecológica responde al proceso de emergencia e imposición de un discurso “verde” de baja intensidad crítica en ámbito de las políticas públicas a escala global (Leff, 2013). Esto último, debido a que, si bien entiende el problema ambiental como un elemento estructural del sistema vigente, parte del supuesto de que la crisis ambiental puede ser “gestionada” a partir de una visión integral y no conflictiva, basada en el consenso y la coordinación entre las instituciones políticas, económicas y sociales, que intervienen en la producción de los problemas medioambientales. Más significativo todavía, en lo que respecta a nuestro tema de interés, invita a imaginar un futuro en el cual el incremento de la productividad económica, la “competitividad” y la obtención de ganancias por parte de empresarios –así como el bienestar social general—, sean compatibilizadas de manera armónica con el cuidado del medioambiente. Para tornar factible dicho imaginario, este discurso verde promueve el desarrollo de conocimiento y tecnología orientada por los valores de la sustentabilidad (Hajer, 2002; Harvey, 2018; Toledo López, 2020).

Ahora bien, como señala Harvey, el discurso del desarrollo sustentable es, como todo discurso hegemónico y con poder de legitimación, susceptible de ser usado y apropiado en función de contextos específicos y a partir de intereses divergentes:

Como discurso, la modernización ecológica (...) una vertiente populista radical que presta mucha atención a las cuestiones medioambientales-ecológicas y, más especialmente, a la acumulación de evidencias científicas sobre los impactos sobre el medioambiente de las poblaciones humanas, sin llegar a desafiar la marcha del sistema económico capitalista. Sin embargo, implica una estricta regulación de los derechos de propiedad privada y en la medida en que se lleva a la práctica puede de facto, a través de la acción reguladora reducir las posibilidades de una descontrolada acumulación de capital. También es, no obstante, un discurso que con mucha facilidad puede corromperse para volverse otra representación discursiva más de las formas dominantes de poder económico. Puede ser apropiado por las corporaciones multinacionales para legitimar una apropiación global de la gestión de todos los recursos mundiales (Harvey, 2018, p. 492).

A pesar de ser un discurso que evade la conflictividad y evita poner en cuestión el sistema económico capitalista, su poder simbólico de legitimación resulta objeto de disputas. En función de esto, puede ser apropiado por proyectos orientados a cercenar la acumulación descontrolada o simplemente corromperse mutando en otra representación discursiva de las formas dominantes del poder económico, en lo que Toledo López denomina “un maquillaje verde” (Toledo López V., 2020).

Tomando como punto de partida el hecho de que la modernización ecológica como discurso esta inherentemente incrustada en los “compromisos institucionales” que estuvieron en el proyecto de creación de la EEA Quimilí. Y, que, su apropiación resulta clave en los discursos de quienes formaron parte de la institución a lo largo de su desarrollo, la pregunta que estructura el problema de investigación es ¿Qué agentes e intereses movilizaron el uso de este discurso y cuáles agendas de investigación se legitimaron durante la primera década de existencia de la estación experimental?

Para poder responder a esta pregunta, en primera instancia, es necesario distinguir dos períodos históricos en el desarrollo de la EEA-Quimilí: Por un lado, una primera etapa de Organización (2011-2015) y, por otro, un segundo momento de Consolidación territorial (2015-2021). Cabe destacar, que la transición entre estas etapas se corresponde a un cambio importante en la dirección de la institución, en virtud de la asunción de directores con perfiles marcadamente divergentes. Pero, además, el cambio a nivel institucional coincide con transformaciones políticas y económica a escala nacional.

En este sentido, las direcciones de la EEA-Quimilí estuvieron marcadas, no sólo por perspectivas y prácticas disimiles en múltiples aspectos –que claramente incidieron en las líneas y los modos de investigación—, sino también por transformaciones en las condiciones materiales, producidas por cambios en lo que respecta a las políticas públicas y las líneas de financiamiento a organismos públicos como el INTA. Particularmente, nos referimos al cambio de gobierno a escala nacional de la presidencia de Cristina Fernández a la de Mauricio Macri, a finales de 2015 y el posterior proceso de desfinanciamiento estatal al rubro ciencia y tecnología (Ekboir, Parellada, & Rivarola, 2019).

A partir del caso de trabajo propuesto, el texto sostiene que el discurso de desarrollo eco-modernizador es apropiado de manera contextual y selectiva por diferentes agentes al interior de la institución, en orden a impulsar y legitimar agendas de investigación que se configuran en virtud de la construcción de alianzas y vínculos con ciertos actores territoriales.

2. La cuestión de la sustentabilidad en la etapa de creación de la EEA Quimilí

Desde comienzos de siglo XX, la región este de la provincia se configuró como un espacio orientado a la explotación de los bosques para la extracción de madereras, leña y carbón. En dicho proceso, la explotación forestal implicó un prolongado proceso de despojo sistemático del bosque nativo, que derivó en pérdida de la biodiversidad y el paulatino agotamiento de la actividad a mediados de siglo (Dargoltz, 1991; Tasso, 2007). Además, partir de la década del setenta, comenzó a desarrollarse un proceso de agriculturización e intensificación de la producción ganadera (Fonzo Bolañez y Parnás, 2020) que alcanzó a toda la región del Gran Chaco Americano y profundizó los efectos socio-ambientales.

Este avance de la agricultura se enmarca en el proceso de la denominada Revolución Verde (Gras & Hernández, 2016; Gargano, 2022) a partir del cual la actividad en cuestión se intensificó y comenzó a expandirse gradualmente a zonas dedicadas históricamente a otras actividades. Particularmente, los departamentos Moreno y Belgrano, fueron dos núcleos importantes de expansión, en un proceso se concretó a lo largo de tres oleadas. Un primer momento, se dio entre los años setenta y ochenta, vinculada al cultivo del sorgo. La segunda experiencia expansiva tuvo lugar durante la década del noventa; ligada a la introducción del algodón y un crecimiento incipiente de soja sembrada con sistemas convencionales. Por último, la expansión más radical y significativa, comenzó aproximadamente a fines de los noventa y se extendió hasta el presente: se trata de la incorporación de paquetes bio-tecnológicos que incluyen el uso de soja, maíz y trigo transgénicos, junto a biocidas y el sistema de siembra directa (Fonzo Bolañez y Parnás, 2020).

La historia del desarrollo del INTA en la región se encuentra ligada a estas transformaciones. Fue en ese marco que, en la década del ochenta, desde la Sociedad Rural de Quimilí –con el antecedente la creación de la primer AER de la zona, en Añatuya en 1967—comenzaron gestiones para crear una AER del INTA en Quimilí, que permitiera la transferencia de conocimiento técnico en el área de influencia del departamento Moreno.

Luis Fernando Gelid, proviene de una familia terrateniente ligada a la Sociedad Rural de Quimilí. Recibido de ingeniero a mediados de los ochenta en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue uno de los primeros técnicos de la AER Quimilí desde su creación en 1987. Posteriormente, se desempeñó como intendente de Quimilí –al igual que otros de sus familiares– y culminó su carrera política a cargo del Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierra y Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, durante el periodo 2005-2018. Como técnico de la AER Quimilí, durante la segunda oleada de agriculturalización de los años noventa, Gelid recuerda haber sido uno de los actores que canalizó la demanda local para la creación de la estación experimental emplazada en Quimilí. No obstante, las gestiones se vieron frustradas por la crisis institucional del INTA, producto de las reformas neoliberales del Estado que desfinanciaron la institución durante la década del noventa (Pellegrini, 2014).

Ahora bien, en el año 2011 el proyecto fue reactivado nuevamente. Esto se debió, en primer lugar, a la expansión del sistema estatal y la inversión en ciencia y tecnología, producida entre 2003 y 2015 (Pellegrini, 2014; Ekboir, Parellada y Rivarola, 2019). Un segundo factor, tuvo que ver con el impulso político desde el Ministerio de la Producción de la provincia de Santiago del Estero y la asunción de Eliseo Monti –predecesor de Gelid en el Ministerio de Producción de Santiago del Estero— en la dirección nacional del INTA en 2011. Por último, el factor central fue el mentado avance de la frontera agropecuaria en la región este entre fines de los noventa y la primera década del nuevo milenio.

Si bien es cierto que, a partir del 2002, se dio fin al modelo neoliberal y se ingresó en una etapa de gobiernos populares, con una fuerte impronta estatal en la dirección de la economía e inversión en el sector público, durante dicho proceso se experimentó un auge en lo que respecta a la expansión de la frontera agropecuaria. En esta línea, Svampa (2019) considera que, más allá de las diferencias políticas e ideológicas entre perfiles gubernamentales neoliberales y gobiernos populares en Argentina y Latinoamérica, existe como trasfondo no cuestionado lo que describe como el “consenso de los *commodities*”: la clara prevalencia de un modelo neo-extractivista, que ha tendido a la re-primarización de las actividades, acentuando la dependencia de países centrales como China.

En dicha coyuntura, las iniciativas para la creación de la experimental volvieron a movilizarse. Según señalaba el ex ministro de la producción de la provincia de Santiago del Estero, el objetivo de su creación fue:

Tener el sostén de una institución señera en el desarrollo agropecuario como lo es el INTA en lo que es la planificación, generación de información básica y encuadrar ese crecimiento, sobre todo agrícola, que se daba por la circunstancia, desde luego con fuerte inversión e impulso privado, pero con una mirada técnica, y de proyección claramente debíamos sostenerla técnicamente para que realmente sea desarrollo. Y la atención puesta en los recursos naturales, en la racionalidad, en la planificación (Entrevista con Luis Gelid, 20 de mayo de 2024).

Como técnico del INTA y a partir del cursado de posgrado agroecología en España, Gelid apropió las preocupaciones/retóricas sobre riesgo ambiental y la gestión de los recursos naturales, así como las ideas respecto al desarrollo sustentable. De hecho, su gestión como ministro de la producción estuvo acompañada de discursos que hacían hincapié en estos tópicos y también aparecieron de manera recurrente en la entrevista. No obstante, como señalamos con anterioridad, su gestión se dio en contexto de avance extraordinario del modelo neo-extractivo en la provincia de Santiago del Estero y su accionar como ministro/empresario/político estuvo orientado a generar las condiciones de posibilidad para ello. En este sentido, como señala Toledo López (2020), el discurso de la modernización ecológica cumplió un rol legitimador del “consenso de los *commodities*”.

Dicho discurso, a su vez, operó como recurso simbólico para problematizar y dar legitimidad a las problematizaciones respecto al riesgo ambiental dentro de una modalidad que no implicara contravenir el modelo productivo neo-extractivo. La idea de crear una experimental, de hecho, no sólo estaba relacionada con el impulso técnico y científico al desarrollo productivo y económico agropecuario. En efecto, la “iniciativa privada” había expandido rápidamente la agricultura de siembra directa y la ganadería intensiva, consolidando una serie de sistemas técnicos que, en el caso de la agricultura, al menos, eran realizados con “tecnología de punta” según la descripción de los técnicos del INTA Quimilí. Pero para actores como Gelid, formados en el INTA, era necesaria la acción estatal para “encuadrar el crecimiento” tomando como eje central una visión “planificada” del crecimiento y un uso “racional” de los “recursos naturales” en lo que implicaba una visión a futuro que contemplaba los riesgos ambientales posibles. De hecho, luego de una década de explotación intensiva sostenida y con la imposición de la agenda internacional del desarrollo sustentable, que imperaba en el INTA y las diferentes esferas gubernamentales, comenzó a problematizarse la cuestión de la degradación de dichos recursos en un ecosistema sumamente frágil como el chaqueño.

En este sentido, como enunciaban las actas de creación de la EEA Quimilí del primero de junio de 2011 – según el acta 430-Punto 3.18—, la institución tenía como objetivo general “promover la sustentabilidad del sistema agroalimentario y agroindustrial”³. Como señalaron los técnicos en las diferentes entrevistas realizadas, la búsqueda de sustentabilidad estuvo orientada desde un comienzo a optimizar la renta de los productores. Empero, con una impronta en lo que respecta a generar investigación y desarrollo en cuestiones que permitieran mitigar el impacto de la degradación ambiental. De esta manera, la visión de sentido común que imperaba en el momento fundacional de la EEA Quimilí, se encuadraba en lo que caracterizamos como el discurso de la modernización ecológica (Hajer, 2002), en el marco de la cual la innovación técnica era pensada como un recurso susceptible de optimizar la productividad y el cuidado del ambiente, de manera sinérgica.

Ahora bien, la cuestión de la sustentabilidad ambiental y productiva, no sólo se encontraba institucionalizada en el INTA, sino que circulaba entre otros actores gubernamentales y organizaciones privadas. Entre estas últimas, se encontraban aquellos ligados a asociaciones productivas como AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa) o ACREA (Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola). Estas asociaciones estaban conformadas principalmente por grandes productores cordobeses y santafesinos, que se instalaron en la región en la media en que los paquetes tecnológicos hicieron plausible la agricultura intensiva en un ambiente que hasta entonces era marginal para el sistema agroalimentario. Según la página oficial de AAPRESID, la “misión” institucional consistía en “impulsar sistemas productivos sustentables de alimentos, fibras y energías a través de la ciencia, la innovación y la gestión de conocimiento en red”.

Cabe destacar que se trata de una asociación que surge en los años ochenta promoviendo la siembra directa como técnica agropecuaria sustentable económica y ambientalmente, en tanto formato que disminuye los costos de producción (mano de obra, combustibles) y, a diferencia de los sistemas convencionales, “elimina la roturación de la tierra y evita la erosión de los agentes climáticos. Esta modalidad permite conservar la materia orgánica y la humedad de los suelos” (Gras & Hernández, 2016, p. 106). Como se mencionó con anterioridad, en la década del noventa, esta modalidad de trabajo adquirió un éxito inusitado al ensamblarse con los paquetes provistos por Monsanto de Soja RR y glifosato, haciendo técnicamente factible el modelo del agronegocio en el país (Gargano, 2022).

En lo que respecta a agricultura, AAPRESID adquirió una vasta influencia en la región este de la provincia de Santiago del Estero desde el punto de vista técnico y científico, en lo que los técnicos del INTA describen como “conocimiento aplicado”, instalando en dicha región dos campos experimentales como la Chacra Bandera y la Chacra Sachayoj. Según la página oficial, el sistema de chacras constituye un programa “creado para dar respuestas a las demandas del productor a través del desarrollo de tecnologías sustentables en los diferentes ambientes y sistemas de producción”.

3. Investigación y sustentabilidad ambiental en la etapa de organización institucional

En agosto de 2011, el Ingeniero Miguel P. fue designado como director organizador de la Experimental de Quimilí. Dicho actor social realizó su carrera en INTA en el área de extensión, desempeñándose como director de la Agencias de Extensión de Malbrán y, luego, como asesor de extensión en el Centro Regional Tucumán-Santiago hasta 2011. Con posterioridad a su periodo en Quimilí, ya en 2015, asumió la dirección del CRTS-INTA y delegó la dirección de la estación experimental a un director interino de confianza, quien dio continuidad al periodo de organización institucional, hasta tanto se sustanció el primer concurso para la dirección de la EEA Quimilí.

Durante los cuatro años de su gestión en Quimilí, estuvo a cargo de reclutar el personal de investigación, organizar la institución y perfilar las líneas a investigar en la flamante institución, administrando los exiguos recursos disponibles en el periodo inaugural. En los primeros tres años, se incorporaron investigadores recientemente recibidos o con una breve trayectoria en el campo laboral, que debían ser formados. Lxs técnicxs entrevistadxs, describen esta primera etapa como un momento inicial en el que tuvo un peso significativo el proceso formativo en posgrados en las respectivas líneas de investigación y el universo institucional del INTA.

En esos años iniciales, las decisiones referidas a las líneas de investigación fueron tomadas de manera negociada entre lxs investigadorxs y la dirección, teniendo en cuenta factores como las posibilidades de infraestructura, los lineamientos/compromisos institucionales y la organización territorial de la EEA Quimilí—constituida por las seis agencias de extensión rural diseminadas al Este de Santiago del Estero, de las cuales cinco preexisten a la experimental—. Entre los lineamientos institucionales, cabe destacar la cuestión de la gestión ambiental y el manejo sustentable de los recursos naturales, que, como dijimos con anterioridad, constituía un compromiso central en la creación de la EEA. No obstante, a esto se sumaba la cuestión del enfoque territorial, que a partir de 2011 adquirió relevancia específica en el INTA. Particularmente, los lineamientos de desarrollo territorial impulsaban, entre otras cosas, la redefinición de las agendas de investigación en el INTA, en función de articulaciones establecidas por los extensionistas y las demandas que provenían de actores insertos en el territorio: productores pequeños, medianos, grandes, empresas, organismos públicos, movimientos sociales. En este sentido, el extensionista adquiría el rol de mediador entre investigadores y actores del territorio.

En consonancia con lo anterior, las investigadoras entrevistadas consideraban que su desarrollo en el campo de la investigación fue posible en la medida en que tuvieron el respaldo de los técnicos ligados al trabajo de extensión. Del mismo modo, destacaban de la gestión de Miguel P. – quien estuvo a cargo de la AER de Malbrán—el hecho de que, por su pasado como extensionista, animó a que la definición de las investigaciones se realizara en vinculación con los actores territoriales con los cuales articulaba cada una de las agencias de extensión.

La vinculación con la extensión le dio un primer rumbo de factibilidad al proceso de investigación, que resultaba el desarrollo central en el proyecto de creación de la EEA Quimilí. Esto también fue posibilitado por el hecho de que el campo experimental y las instalaciones edilicias de la EEA no estuvieron disponibles para su uso sino hasta fines de 2015, cuando comenzaba el proceso de consolidación institucional. Debido a esta situación, los únicos campos en los cuales era posible realizar ensayos experimentales e investigación resultaban ser los de productores locales. Y, para dicho contacto, era necesario el lazo con los extensionistas que conocían los perfiles productivos y las características de los campos.

El modelo de gestión de Miguel P. y su particular énfasis en el enfoque territorial, apuntó a una forma de organización que estuvo legitimada por el contexto institucional del INTA y, particularmente, por la dependencia del Centro Regional Tucumán-Santiago. En efecto, fue este centro regional uno de los lugares a desde donde adquirió mayor envergadura el enfoque territorial, que llamaba a redefinir las investigaciones en vínculo con los actores de cada territorio específico. Esto último, debido a que Eliseo Monti, entonces director del CRTS-INTA y uno de los principales promotores de esa lógica de trabajo, tomó el cargo de director en el Consejo Nacional del INTA e institucionalizó la nueva lógica de trabajo escala nacional mediante proyectos de financiamiento denominados PRETs (Sánchez Macchioli, 2020).

El universo rural del este santiagueño estaba compuesto por múltiples y heterogéneos segmentos socio-productivos, cuya presencia remitía a diferentes temporalidades históricas. Algo propio de espacios que dejaban de ser marginales en el modelo agroalimentario, dado que experimentaban el avance del modelo neo-extractivo (Svampa, 2019; Toledo López, 2020). Las entrevistas realizadas fueron mostrando que las vinculaciones “territoriales”, en dicho contexto, podrían ser con pequeños productores apícolas y caprinos; pequeños, medianos y grandes productores dedicados a la ganadería bovina de cría; o, incluso, un heterogéneo abanico de grandes productores ligados a la agricultura intensiva. Por ejemplo, en el rubro ganadería bovina de cría, se articulaba con pequeños y medianos ganaderos, que resultaban ser productores de origen local que criaban de manera extensiva-tradicional. Pero, también, con grandes productores, con mayor tecnificación, vinculados a grupos como ACREA, provenientes de Córdoba y Santa Fe, con lógicas productivas adquiridas en la región pampeana.

En el rubro agricultura intensiva —la actividad de mayor renta—, sobresalían distintos perfiles de sistemas productivos: En primer lugar, los sistemas productivos de actores que arrendaban la tierra y mantenían prácticas identificadas por Miguel P. como perniciosas para los recursos naturales, dado que comprometían la sustentabilidad ambiental. Entre ellas, destacaba el hecho de “hacer soja sobre soja, sin realizar rotación con otros cultivos”. En este caso, los “arrendatarios” se veían conminados a dicha modalidad de trabajo en virtud de los altos precios que debían pagar por el arriendo de tierras que imponían los propietarios lo largo del año. En la zona también estaban instalados distintos *pools* de siembra, que eran asociaciones guiadas por una lógica de obtención de mayores márgenes de renta y maximización de los beneficios, entre los cuales primaba el monocultivo de soja sin rotación. En contraposición, Miguel P. destacaba a agricultores, mayormente provenientes de Córdoba y Santa Fe, que eran propietarios de sus tierras y residían o permanecían en la región durante largos periodos, generalmente asociados a organizaciones como APRESSID.

Miguel P., en efecto, señalaba que rol del INTA debía ser la articulación con todos los productores del territorio sin preferencias o tendencias por alguno en específico, ya que “el INTA tenía programas para llegar a todos” y era una institución pública que bregaba por el bien colectivo, más allá de las diferencias y las desigualdades. No obstante, establecía distinciones entre los que eran identitariamente productores –lo que implicaba “un modo de vida” — y aquellos actores que no lo eran, aludiendo a los *pools* de siembra. Estos actores, que “no eran agentes de la sociedad”, en general, realizaban su actividad de manera intensiva, en virtud de los altos “rindes” en el corto plazo, sin proyectar las consecuencias ambientales en el largo plazo. Por contraste, daba un valor significativo a los empresarios de APRESSID o ACREA, a quienes consideraba “productores de punta” no sólo en cuestiones de productividad, sino también de conservación de los recursos naturales en el marco de la agricultura industrial.

De hecho, el entonces director adscribía a una visión de desarrollo que consideraba propia del INTA y que sintetizaba con la frase “conservar produciendo y producir conservando”. Una mirada que cuadraba plenamente a los lineamientos de la modernización ecológica como discurso orientado a intensificar la producción y el cuidado del medioambiente mediante el desarrollo de ciencia y tecnología.

En esta tendencia por alcanzar a todos los productores, los extensionistas tenían una presencia muy fuerte entre los pequeños productores y se ponderó con cierto ímpetu el “acompañamiento” a este sector: una categoría que hacía énfasis en el rol del extensionista como “agente de desarrollo” que asesoraba las iniciativas de los productores. Sin embargo, en esta etapa, los pequeños productores tuvieron un rol menos significativo en la delimitación de las líneas de investigación, que se perfilaron hacia demandas de grandes y medianos productores.

Un ejemplo claro de esta diversidad era el trabajo de Úrsula W., especializada en ganadería, quien llevaba a cabo sus investigaciones con medianos productores oriundos de la zona, asociados al Programa de INTA Cambio Rural y, al mismo tiempo, con grandes productores que formaban parte de la asociación ACREA. En este caso, la investigadora se dedicaba al estudio de pasturas mega térmicas, que eran implantadas y utilizadas en general por medianos y grandes productores, constituyendo “el recurso forrajero más abundante” entre estos sectores más o menos capitalizados.

Por su parte, Amanda V., quien trabajaba en el área de suelos desde su ingreso en 2012, se dedicó primero al trabajo de indicadores de calidad de suelo y luego redefinió su temática a cartografías de suelo, en 2014. Estas cartografías, generaban “información básica” sobre los tipos de suelo que se encontraban en la zona este y su utilidad radicaba en saber cuál era el potencial productivo y qué actividades no debían hacerse en cada tipo de suelo, en tanto representaban riesgo de degradación de los mismos. Tal actividad fue tomada por esta investigadora con base a la demanda de grandes productores ganaderos y agricultores provenientes de otras provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, a donde existían cartas del suelo y se habían convertido una “información básica” para la “toma de decisiones del productor” respecto a “que hacer en cada tipo de suelo”. No obstante, señalaba Amanda V., su elección también estuvo guiada por interacciones con pequeños productores, que le preguntaban sobre las razones por las cuales ciertos cultivos, como el maíz, dejaban de crecer o en qué tierras era posible construir cercos para siembra a pequeña escala.

En este sentido, si bien la orientación de la investigación realizada en la EEA no estuvo dirigida directamente a los pequeños productores, la vinculación entre esta actividad y la extensión generó interacciones cotidianas entre investigadores y los minifundistas que, como señaló Amanda V., “eran escuchados” y constituían un horizonte de sentido en las prácticas de investigación.

De manera general, el “enfoque territorial” como lineamiento fue clave para la definición de las líneas de investigación, en un marco en el que primaban las voces de medianos y grandes productores en la mayoría de las investigaciones, pero no dejaban de estar presentes actores pequeños y las poblaciones rururbanas y subalternas de la zona. Esto se vio reflejado a su vez en los lineamientos de referidos al impacto ecológico y el riesgo ambiental.

De hecho, durante la dirección de Miguel P. se intentó redefinir la investigación con una impronta ligada a la gestión ambiental. Según una entrevista realizada al director organizador en el año 2013:

La experimental este de SGO DEL Estero se crea fundamentalmente por la gran necesidad de información que tenían productores, organizaciones del medio y organismos gubernamentales, en todo aquello que tenía que ver con la gestión ambiental. De hecho, nosotros vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con la competitividad productiva, con todos los demás temas, pero el tema gestión ambiental, es como que nos hacía falta también trabajar mucho más y mucho más focalizado en la zona (Miguel P., entrevista realizada desde el Centro Regional Tucumán-Santiago).⁴

En retrospectiva, la mayoría de las personas entrevistadas señalaron que la dirección de Miguel P. tuvo como principal impronta la cuestión de la sustentabilidad económica o productiva, más que lo ambiental. No obstante, también señalaron que hubo intentos por impulsar la “gestión ambiental” con algunos resultados. Cómo hemos referido en apartados anteriores, la idea de gestionar lo ambiental, constituye una forma de enunciación del problema que se enmarca dentro de lo que Hajer (2002) denomina discursos de modernización ecológica. Una forma legitimada de enfocar los problemas ligados a la “crisis ambiental” que considera la posibilidad de mitigar los efectos de la contaminación o la degradación estableciendo acuerdos con los actores que la producen para que las transformen sin perjudicar su rentabilidad.

Esta impronta, se trasladó al plano de la investigación, con la elección en la coordinación de investigación de Valeria C, Lic. En ecología de formación, quien formó parte del equipo de gestión de Miguel P. hasta el 2015. Desde su ingreso en 2013, Valeria se dedicó a la temática de ordenamiento territorial, teniendo un enfoque basado en la gestión ambiental. Según recordaba Valeria C., ya como coordinadora de investigación, intentó hacer de la gestión ambiental una cuestión transversal a las diferentes investigaciones, a fin de reflexionar respecto al impacto que tienen en el ambiente las actividades investigadas. Este enfoque, según recuerda la ecóloga, tenía un importante respaldo institucional:

Valeria C.: Lo ambiental era algo que le pedían que esté y pedían resultados de cosas, entonces tenía que estar.

Entrevistador: ¿Quién le pedía?

Valeria C.: Bueno, porque eran acuerdos también que se habían firmado así. La creación del INTA en Quimilí se crea con ese fin también, mejorar la producción, pero mejorar también la gestión Ambiental, eso era transversal a todas las áreas (Entrevista realizada a Valeria C. 2 de septiembre de 2024).

En este sentido, gestión ambiental era un lineamiento demandado por las autoridades de INTA de manera transversal para la región este de la provincia y apoyado por la dirección local de la EEA. En su trabajo como coordinadora de investigación, fue generando actividades y vinculándose a proyectos nacionales que estaban orientados al análisis de la contaminación por “agrotóxicos” y las demandas de las poblaciones rurales y rururbanas que padecían los efectos de la fumigación. Ella destacó como una reivindicación del periodo, el hecho de poder haber nombrado como “agrotóxicos” a los químicos utilizados para fumigar, como es el caso del glifosato, teniendo en todo ese proceso el apoyo del director de la experimental.

Junto a Valeria C. participó Laura M., del área de recursos naturales, quien específicamente midió la presencia del glifosato en el agua para consumo animal y humano en pozos, aljibes y represas, encargándose de investigar “qué sucede con el glifosato después de ser usado como agroquímico”. Es decir, no ya como una herramienta para combatir malezas en los cultivos –tal y como lo hacían otros miembros de la EEA—, sino como un “contaminante” del ambiente. Los resultados obtenidos, de hecho, fueron que este químico se encontraba presente en el agua para consumo humano y animal. Esto último, contravenía notablemente el consenso impuesto en el mundo agropecuario respecto a que dicho biocida se degradaba completamente en la tierra. Y, de hecho, constituía un enfoque que cuestionaba el denominado “consenso de los commodities” al interior de la del INTA, poniendo en discusión los riesgos sanitarios causados por la fumigación y la sustentabilidad social de la agricultura industrial (Toledo López et al., 2020).

En este contexto particular, estas investigadoras abrieron una ventana para problematizar e incluir la cuestión de la “contaminación por agrotóxicos”, tomando la demanda de los pueblos y comunidades fumigadas, algo que en ese momento resultaba significativo tanto a investigadores como a técnicos extensionistas de diferentes AERs. En ese sentido, para Valeria C. la gestión de lo ambiental se aproximaba más a problemáticas sociales y no sólo a cuestiones de sustentabilidad productiva que era la visión hegemónica al interior del INTA.

También adquirió importancia como problema ambiental central la cuestión de la degradación de los suelos, una temática que se instaló de manera transversal a los diferentes tipos de producciones y regiones del este santiagueño. En efecto, en la región los cambios de usos de suelo habían generado diferentes formas de degradación ligadas a la compactación, la salinización y la erosión eólica e hídrica. En esta línea, Úrsula W. señala que era la temática ambiental de mayor importancia y lo sigue siendo hasta el momento:

Creo que lo que lo que más se trabajó, siempre se sigue trabajando el tema de degradación de suelos, o sea, principalmente los centros de degradación que están vinculados a erosión, erosión eólica y erosión hídrica...Tenemos como hilo conductor en toda la región la degradación de tierra, por los cambios de uso y por manejo que se hace. Por ahí en ganadería no tanto, pero si sucede (Entrevista realizada a Úrsula W.).

Los problemas de degradación, luego de más de diez años sostenidos de expansión sistemática de cultivo de la soja eran múltiples. Efectivamente, los desmontes para la implantación sistemática de la oleaginosa y la falta de rotación de cultivos –o “cambios en los usos”—, estaban degradando el suelo y uno de los efectos más notables se empezaban a ver en las zonas pioneras en agricultura, como la región de Bandera, Departamento Belgrano, a donde la tierra había comenzado a salinizarse, conllevando altos riesgos de desertificación del territorio. En otros núcleos más recientes de agricultura, como la zona de Sachayoj, en cambio, el problema central residía en la erosión hídrica y eólica. Mientras que en los campos sembrados con pasturas megatérmicas para ganadería la compactación de la tierra también resultaba una problemática a considerar.

Ahora bien, otros investigadores con una orientación hacia la optimización de la producción agrícola –ligados al estudio de técnicas y tecnologías para combatir plagas, malezas e insectos en cultivos-, a quienes Valeria C. caracteriza con un perfil “más productivista”, mantuvieron cierto rechazo respecto a la cuestión de la gestión ambiental, orientándose a la búsqueda de desarrollos que permitieran la competitividad y la rentabilidad de los sistemas.

4. El proceso de consolidación de las líneas de investigación de la EEA Quimilí

El proceso de consolidación de la EEA Quimilí tuvo a la Ingeniera agrónoma Graciela L. a la cabeza de la institución a partir de 2016, la primera directora en ingresar por concurso. Su perfil estaba vinculado originalmente a la enseñanza e investigación universitaria, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En dicho marco, entre 1998 y 2006 obtuvo una maestría y un doctorado en Chile y México, respectivamente. Posteriormente, en el año 2010, ingresó a la empresa multinacional *Dow Agroscience*. El trabajo en dicha empresa, según recuerda Graciela L., marcó el punto más álgido de su carrera, puesto que el tipo de investigación, los salarios y el prestigio obtenido en dicha multinacional, eran valorados por sobre la trayectoria en instituciones públicas como la universidad y el INTA.

Según recuerda Graciela L., la fusión de las empresas multinacionales *Dow Agroscience* y *Pioneer*, generaron un recorte de la planta de investigadores y, en virtud de ello, prescindieron de sus servicios. En los momentos posteriores a ser despedida de *Dow Agroscience*, por iniciativa de su ex “líder” en dicha empresa, se encontraba desarrollando un emprendimiento agronómico destinado a realizar servicios técnicos a multinacionales, tales como *Dow Agroscience*. No obstante, en el año 2015, surgió la posibilidad de concursar para la dirección de la EEA Quimilí y, al obtener el cargo en 2016, el emprendimiento de servicios para grandes empresas quedó relegado.

A diferencia del anterior director, Graciela L. no realizó su carrera en el INTA y muchos de los entrevistados señalaron que desconocía y contravenía las lógicas históricas de trabajo institucional. Además, durante las entrevistas, fue sumamente enfática en señalar que su modo de gestión institucional y su horizonte de producción de conocimiento eran completamente antagónicos respecto a la cultura institucional que primaba en el INTA en el momento de su inserción –y, en general, con las lógicas de trabajo estatales. En ese sentido, durante este proceso tuvo como horizonte consigna “un cambio cultural”, a sabiendas “que muchos no lo iban a entender”. Cabe destacar, que algunas de las personas entrevistadas resaltaron su capacidad para construir articulaciones territoriales con grandes empresas. También subrayaron que el hecho de ser investigadora de oficio le permitió guiar y consolidar de una manera más precisa los procesos de investigación. No obstante, otros entrevistados aseguraron haberse sentido violentados en el plano laboral.

Su paso por la EEA tuvo como hilo conductor una visión organizativa de la investigación y la extensión con un modelo de gestión que giraba en torno a la articulación territorial estrecha con actores privados, ligados principalmente al mundo de la producción de agricultura industrial a gran escala. En un sentido importante, puede pensarse que el proyecto/emprendimiento personal de realizar servicios a grandes empresas, de hecho, fue redefinido por Graciela L. a escala estatal, generando una reorganización al interior de una institución pública como la EEA Quimilí. Dicha redefinición, fue posible a partir de la relevancia central que adquirió una figura legal con un rol secundario hasta ese momento en la institución: los “servicios a tercero”.

Esta figura consiste en servicios técnicos a empresas por parte de los agentes estatales de INTA, con el objetivo de realizar tareas como ensayos en el campo experimental de la institución o en parcelas de productores para obtener información específica. Y, a través de esta figura, la institución recibía una remuneración extrapresupuestaria. Por ejemplo, en una auditoría de la EEA Quimilí, llevada a cabo durante el año 2019, se señalaba que “la EEA Quimilí lleva a cabo sus actividades de ensayos de investigación mediante la formalización servicios técnicos especializado” y que al momento se encontraban “vigentes 13

servicios, de los cuales, muchos de ellos se realizan con empresas como Bast Argentina S.A., Dow Agroscience Argentina S. A., Artista Lifesciencia Argentina, entre otras” (Auditoría INTA-Quimilí, 2019, p. 16). No obstante, los 13 casos mencionados por la auditoría resultaban servicios a terceros realizados en el campo de la EEA Quimilí. A ello, según entrevistas realizadas, se sumaban otros servicios técnicos que surgieron durante las entrevistas para la Chacra Sachayoj y la Chacra Bandera, dos campos experimentales pertenecientes a la asociación APRESSID. Según Graciela L.:

Me tocó el gobierno de Macri. Y nos decían que nos iban a recortar el presupuesto (...) Los llamo a reunión y les digo que nos recortan 24.2% del presupuesto (...), tenemos dos caminos, o cerrarnos dentro de estas cuatro puertas y llorar por lo que nos quitaron o abrir las puertas e ir por los socios nuestro que tienen dinero (...) Vamos a ir por la segunda opción y eso no hay vuelta de página porque es una decisión de dirección tomada (Entrevista realizada a Graciela L. julio de 2024).

Mientras que, según señalaron lxs entrevistadxs, en el proceso de organización institucional el financiamiento provenía exclusivamente de proyectos INTA, con la segunda gestión comenzó un proceso de obtención de financiamiento a partir de servicios al sector privado que venía a complementar los recortes. Esto último, no obstante, fue apuntalado en un contexto de desfinanciamiento de las instituciones públicas producidas durante el gobierno de Mauricio Macri, a partir de diciembre de 2015, que implicó, según Graciela L., una quita del 24% del presupuesto (Ekboir, Parellada y Rivarola, 2019).

Esta lógica de trabajo y el contexto político-institucional, operaron en la redefinición de los objetivos de investigación y la apertura de un conflicto con los modos establecidos de realización de extensión. En efecto, los focos de mayor tensión en los intentos de “cambio cultural” propuestos por Graciela L., parecen haber venido de la mano de conflictos con extensionistas, muchos de los cuales articulaban su trabajo con pequeños y medianos productores. En palabras de la entonces directora, los extensionistas articulaban con productores “fantasmas”, que “no existían”, puesto que no tenían sus bienes y su producción blanqueados en la AFIP; algo recurrente en el caso de productores puesteros de origen local, ligados a la ganadería extensiva tradicional de la zona. De este modo, la cuestión territorial tuvo un giro significativo durante su gestión, dado que la dirección ponderó como “socios territoriales” a productores ligados a asociaciones como AAPRESID y ACREA, a dónde se encontraban “los productores empresariales importantes, líderes”, según Graciela L.

Esto se vio reflejado en la constitución del Consejo Asesor Local (CLA),⁵ establecido en 2018 Por resolución del Centro Regional Tucumán-Santiago, N° 16/18. El CLA, que hasta ese entonces no se había constituido de manera formal, se configuró con la presencia de organismos públicos y privados. Entre los primeros, destacaban la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el SENASA. Mientras que, entre los organismos privados destacaban AAPRESID (en calidad de Asociación privada de productores para el desarrollo del sistema productivo) y CREA Región Chaco (Consortios Privados para la Experimentación Adaptativa).

En lo que respecta a las líneas de investigación, alguna de ellas fueron objeto de un corte abrupto, mientras que otras reperfiladas y favorecidas por la nueva lógica de trabajo en términos del nuevo sistema de financiamiento institucional. Por ejemplo, hacia el año 2017, la línea de investigación referida a la contaminación por “agrotóxicos” fue recortada de la cartera de proyectos institucionales. Respecto a esto, encontramos distintas opiniones entre lxs investigadorxs sobre los motivos que llevaron al recorte. Por un lado, Laura M. señaló que el tema se dejó de trabajar para concentrar las energías en el desarrollo de cartografías de suelo y temas de degradación, que consideraba un aporte más significativo a la región en virtud de las demandas de los productores locales. Mientras que, Valeria C., coordinadora de investigación durante el proceso de organización institucional, advertía enfáticamente que las presiones del CLA sobre la dirección de la EEA Quimilí y el Centro Regional Tucumán-Santiago fueron claves para discontinuar dicho lineamiento durante el gobierno de Macri (Toledo López et al., 2020).

Lo que adquirió, por el contrario, una revalorización inusitada fueron las cuestiones ligadas a los estudios de suelo. En efecto, en una auditoría realizada durante el 2019, la principal línea de investigación definida por el CLA era “En la temática Suelos y Gestión Ambiental involucra la gestión sustentable de los recursos(...). En esta temática están presentes la degradación física del suelo, erosión, el uso de estrategias diversas para mejorar este aspecto” (Auditoría INTA-Quimilí, 2019, p. 13).

Esta visión, alentó que el Grupo de Trabajo de Gestión ambiental empujara investigaciones ligadas a temáticas vinculadas al suelo exclusivamente. La más notable de ellas en ese periodo y en momentos posteriores fue el desarrollo de cartografías del suelo, que venía siendo realizada por Amanda V. y en años posteriores sumó a Laura M. Al respecto, Amanda V. señalaba que, si bien su línea de trabajo se profundizó, puesto que las cartas de suelo eran demandadas por los grandes productores, las circunstancias institucionales y políticas a escala nacional conllevaron un cambio en la lógica de trabajo:

Cuando estaba Miguel P. se escuchaba más al pequeño productor. Bueno, se acompañaba más y el INTA hacía todo, digamos. Por decirte todo, porque yo me encargaba de pagar los análisis de suelo. Cuando ha llegado la gestión de Graciela ha coincidido con la época de Macri, la impronta era otra. Se trabajaba con esos productores que mostraban monetariamente capacidad para pagar, entonces ya era otra cosa. (...). Bueno, no había plata y había que fortalecerlos de alguna forma, seguir laburando, pero seguir laburando con el financiamiento de manera totalmente diferente (Entrevista realizada a Amanda V.).

Como señalaba la experta en cartografías, pasó de trabajar con un amplio abanico de productores y financiamiento de proyectos INTA, a trabajar exclusivamente con grandes productores, ligados mayormente a APRESSID y empresas multinacionales, utilizando financiamiento provisto por el sistema de servicios a terceros. Cabe resaltar que Amanda V. y Graciela L. formaron parte de la Mesa de expertos de la Chacra Sachayoj de dicha organización, constituida por profesionales del INTA. Del mismo modo, otros investigadores de la EEA Quimilí formaban parte de la Mesa de expertos de la Chacra Bandera, al sureste de la provincia.

Otros trabajos en términos de degradación de suelos también fueron apuntalados durante esta gestión a través de los trabajos de Laura M. y otros miembros del equipo. En este contexto, de hecho, también tomaron mayor relevancia temas como erosión hídrica y eólica, compactación y salinización. En efecto, la cuestión del suelo es un tema sumamente importante para asociaciones como la APRESSID, que promueven un modelo productivo que cuadra en lo discursivo con la modernización ecológica (Hajer, 2002), al promover modelos sustentables o sostenibles en los que logra compatibilizarse la optimización de la conservación de recursos naturales y la intensificación de la producción.

En efecto, cuando la siembra directa comenzó a instalarse en el sistema productivo agropecuario, fue legitimada con un discurso de características “verdes” como una modalidad tecnológica de siembra que permitía conservar las características físicas, orgánicas y químicas del suelo, garantizando tanto la renta como la sustentabilidad ambiental al evitar la degradación de los suelos (Gras & Hernández, 2016, p. 146). Como señalan Hernández y Grass “La AAPRESID interpeló a los empresarios que veían como antagónicas la conservación y la intensificación productiva y a los críticos de la agricultura industrial” (2016, p. 143).

Efectivamente, existe cierto consenso impuesto en organismos privados y públicos del rubro agropecuario respecto a la eficacia de la siembra directa, promovida originalmente por APRESID -elimina el trabajo de roturación de la tierra— en la mitigación de los efectos de la erosión en los sistemas productivos agrícolas. Esto, en principio, permitiría la conservación de la materia orgánica y la humedad de los suelos. Sin embargo, el problema surgía a partir del control químico de agentes patógenos o maleza, que requerían el uso de biocidas como el glifosato (Gras & Hernández, 2016). En ese sentido, el hecho de discontinuar las investigaciones referidas a los efectos contaminantes de dicho herbicida, puede ser comprendido en el horizonte de influencia de asociaciones ligadas a la siembra directa en el Consejo Asesor Local. Y, por medio de este organismo, la influencia de organizaciones como la AAPRESID.

En todo este proceso, al ser consultados respecto al lugar que tuvo la sustentabilidad en la gestión de Graciela L., la mayoría de los entrevistados señaló que su orientación estuvo dirigida de manera mucho más rotunda por criterios de sustentabilidad económica y que los servicios a tercero fueron los que impulsaron una profundización en esa dirección. No obstante, la sustentabilidad ambiental fue considerada con un rol secundario, subordinada explícitamente a la sustentabilidad económica y casi desplazando definitivamente el pequeño lugar de “lo social”, que los actores vinculaban al trabajo con pequeños productores. En esta línea, el argumento más importante esgrimido en esta línea tuvo que ver con la cuestión de la “escala” de los productores. En efecto, Leguizamón señalaba que:

Había unos que no querían trabajar con productores grandes. Muy bien ¿Con cuántos chiquititos trabaja? Bueno ¿En cuánta superficie vas a incidir cuando trabajes con tus pequeños? (...) Los problemas grandes los tenemos con los grandes y peleándonos con ellos no lo vamos a solucionar y decían "No ya han arrasado el monte". (...) No vamos a enfrentarnos con los productores grandes, sino que vamos a trabajar con ellos y solucionar problemas. Con uno que tenga 40.000 hectáreas y nos solucionen el problema de erosión o prevenga la erosión, habremos hecho una contribución enorme a la sustentabilidad ambiental y al desarrollo. (...) Aquí hay que cambiar. Hay que (...) meterse en sus sistemas y ver que podemos cambiar nosotros, humildemente, desde el desde el INTA (Entrevista realizada a Graciela L. en julio de 2024).

Este argumento esgrimido por Graciela L. para legitimar el protagonista que tuvo el trabajo con grandes productores fue señalado como atinado por otros investigadores. En efecto, señalaron que incidir sobre la degradación de suelos de los grandes productores y lograr corregir prácticas que conducen a la erosión, la compactación y la salinización resultaban elementos claves para tornar sustentable ambiental y productivamente el sistema agropecuario local, puesto que a través de ellos se incidía en una mayor superficie. Desde otra perspectiva, otros mostraron cierto disgusto por la preferencia institucional por trabajar con los grandes productores, a quienes consideraban en la causa de los grandes problemas ecológicos y de sustentabilidad que experimentaba la región. Sobre todo, con la consideración de que el desmonte para agricultura resulta la principal causa de las distintas formas de degradación ya mencionadas.

A pesar de las divergencias ya señaladas entre la primera y la segunda gestión, existe una convergencia importante respecto a ciertos actores y circunstancias que marcan un horizonte de riesgo ecológico clave en lo que respecta a la producción agrícola: el sistema de arriendos a “quintal de soja” y la presencia de *pools* de siembra orientados por la maximización de ganancias en el corto plazo. Este consenso, incluso, se encontraba avalado por el CLA y asociaciones como AAPRESID y ACREA, en tanto, que, de conjunto, consideraban que las prácticas de “soja sobre soja” resultaban un problema que afectaba a escala de “cuenca” a muchos otros productores de la zona.

5. Conclusión

A lo largo de tres apartados se puso el foco en usos, apropiaciones y contextos del discurso de desarrollo eco modernizador, en el marco de la creación y consolidación institucional del INTA-Quimilí. Dicha forma discursiva, como señaló Toledo López, ha tendido a legitimar el denominado “consenso de los commodities” durante el proceso de expansión del modelo neo- extractivista en la provincia de Santiago del Estero en los últimos 25 años.

Ahora bien, al interior del sistema neo-extractivo, el discurso eco moderno ha posibilitado a actores estatales problematizar los efectos de la degradación de los “recursos naturales” y prever a futuro una crisis ambiental irreversible en la región este, que resultaba la principal fuente productiva de una provincia fuertemente reprimarizada. De hecho, la creación de la EEA-Quimilí, se inscribía en esta perspectiva, que ponía el acento en los procesos de degradación ambiental y la necesidad de desarrollar tecnologías que contribuyan a intensificar la producción conservando el suelo y el agua. Esto último, se contraponen notablemente con la carencia de un perfil de desarrollo en el marco del cual ordenar territorialmente la expansión de la frontera agropecuaria, que predominó en la etapa previa a la asunción del Frente Cívico en la provincia de Santiago del Estero.

A escala institucional, el discurso eco-moderno al interior de la EEA-Quimilí fue apropiado de manera divergente e incluso usado para defender intereses contrapuestos en el marco de contextos de conflicto. Por ejemplo, durante la dirección de Miguel P., la “gestión ambiental” fue una orientación que pretendió ser transversal, impulsando investigaciones y prácticas de extensión que pusieran en agenda la cuestión de la degradación y los problemas ambientales, que afectaban al mosaico heterogéneo de actores territoriales (productores grandes, medianos, pequeños, así como a pueblos y parajes). Si bien es cierto que los grandes productores tuvieron un rol central en la definición de las agendas incipientes de investigación, no existieron lineamientos para excluir determinado sector y las líneas asumidas por los investigadores no fueron impuestas desde la dirección, sino elegidas de manera negociada, generando un margen de acción importante para temáticas no subordinadas al modelo neo-extractivo. Esto derivó, particularmente, en un uso del discurso eco modernizador orientado a problematizar y articular resistencias contra la contaminación producida por el uso “agrotóxicos”. Un frente de tensión y disputas que, además, no fueron abiertos únicamente en la zona este de Santiago, sino que implicaron redes de resistencia extensas que incluían a investigadores y extensionistas del INTA a nivel nacional cuestionando perspectivas hegemónicas respecto al modelo agroalimentario vigente.

En la segunda gestión, se pudo observar cómo, en determinadas circunstancias específicas, en las cuales las instituciones estatales se tornaban traslucidas por la falta de financiamiento, se generan las condiciones para la colonización de organizaciones privadas sobre instituciones estatales. En este caso, mediante la articulación subordinada a financiamientos privados, que arriban con lineamientos que respondían a intereses específicos de cierto sector empresarial y orientaban las prácticas de investigación. En dicho contexto, el discurso eco modernizador se impuso junto a una agenda de “sustentabilidad” que respondía a los intereses con una fuerte afinidad con instituciones como AAPRESID, convirtiéndose en uno de los principales socios territoriales y actores importantes en la definición de la agenda de investigación. Esto se hizo notable en las presiones por discontinuar las investigaciones referidas a “agrotóxicos” y la profundización en intereses relativos a la investigación de técnicas que permitan mitigar los efectos degradación del suelo que comprometen la “sustentabilidad” en los diferentes ecosistemas de la región semiárida que están siendo sometidos a la lógica productiva contemporánea.

Todo esto resulta indicativo a escala local de un alineamiento más férreo del INTA respecto al modelo neo-extractivo que, a su vez, es concomitante a un proceso de exclusión de las demandas territoriales de pequeños productores en las definiciones de las líneas de investigación. Profundizando, de esta manera, la desigualdad en el acceso del sector a innovación diseñada a medida de sus necesidades e intereses. Y afianzando la lógica tendiente a la extinción de ganaderos pequeños y medianos de cría que todavía pueblan la región a pesar avance de la agricultura industrial.

Referencias bibliográficas

- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Siglo XXI.
- Dargoltz, R. (1991). *Hacha y quebracho. Santiago del Estero: El drama de una provincia*. Ediciones Conciencia Nacional.
- Ekboir, J., Parellada, G. y Rivarola, E. (2019). La ciencia necesita más que financiamiento. *Presentado en la Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- Fonzo Bolañez, C. y Parnás, M. (2020). La estructura agraria y social de Santiago del Estero en las últimas décadas frente a la expansión de los agronegocios. *CIFRA*, 5, 40-80.
- Gargano, C. (2011). Ciencia, tecnología y dictadura: la reorganización de las agendas de investigación y extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria durante la última dictadura civicomilitar argentina (1976-1983). *Realidad Económica*, (285), 107-108.
- Gargano, C. (2022). *El campo como alternativa infernal. Pasado y presente de una matriz productiva Sin escapatoria?* Imago Mundi.
- Gras, C. y Hernández, V. (2016). *Radiografía del nuevo campo argentino. Del terrateniente al empresario transnacional*. Siglo XXI.
- Hajer, M. (2002). *The Politics of Environmental Discourse*. Oxford University Press.
- Harvey, D. (2018). *Justicia, Naturaleza y la Geografía de la Diferencia*. Traficantes de Sueños.
- Leff, E. (2013). La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. *Cuadernos*, 1(10), 185-209.
- Pellegrini, P. (2014). Argentina: evolución del presupuesto y del personal del INTA (1958-2010). *Realidad Económica*, (285), 30-50.
- Sánchez Macchioli, P. (2020). La operacionalización del concepto de territorio en el INTA: Los proyectos regionales con enfoque territorial. *Economía, Sociedad y Territorio*, 63(20), 513-536. <https://doi.org/10.22136/est20201564>
- Svampa, M. S. (2019). *Las Fronteras del Neo-extractivismo*. Calas.
- Tasso, A. (2007). *Ferrocarril, quebracho y alfalfa. Un ciclo de agricultura capitalista en Santiago del Estero, 1870-1940*. Alción.
- Toledo López, V. ., Schmidt, . M. ., Langbehn, C. L. ., Pereyra, H. ., García Battán, J. ., y Ceirano, V. (2020). Riesgos e impactos socio-sanitarios del uso de agroquímicos: un estudio de caso en Selva, Santiago del Estero, 1990-2019. *Revista Argentina De Salud Pública*, 12, e15. <https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/article/view/89>
- Toledo López, V. (2020). When capital loses its green makeup. The impact of biodiesel production on Santiago del Estero Province, Argentina . *Sociedade & Natureza*, 32, 367-380. <https://doi.org/10.14393/SN-v32-2020-44208>

Notas

¹ Página INTA: <https://www.argentina.gob.ar/inta/cr-tucuman-santiago/eea-quimili>.

² Es un organismo descentralizado y autárquico, dependiente de la secretaria de Agricultura y ganadería de la Nación. Al igual que otras instituciones del sistema científico-tecnológico argentino, el INTA fue

creado a finales de la década del cincuenta en el marco del Plan Prebisch. Dicho plan, establecía entre las causas del estancamiento agrario el retraso en cuestiones de tecnificación y aplicación de conocimiento. Por dicho motivo, el diagnóstico consistía en que era necesario aumentar los rendimientos y para ello se incentivaba la incorporación de tecnología agropecuaria. (Gargano, 2011).

3 Repositorio INTA.

4 <https://www.youtube.com/watch?v=BcnsGhHpuQ>

5 Según el Decreto-Ley 21680/56 de creación del INTA, en su artículo 11° establece que en cada EEA funcionará un CLA integrado por “funcionarios técnicos de sus propios servicios, productores agropecuarios, representantes de los organismos locales de las provincias adheridas y otras entidades regionales”.